

Tras las elecciones andaluzas

EL FIN DE LA TRANSICION

HAN ganado «los marxistas» han ganado «los rojos»: los comentaristas desestabilizadores al brillante, al espectacular triunfo socialista en las elecciones de Andalucía brotaron ya en la misma madrugada del 23 al 24, y estaban ya contenidos en la misma campaña. Los famosos, debatidos, anulados y rehabilitados carteles y anuncios

de la Patronal contenían ya ese tipo de versión; podría incluso pensarse que estaban hechos ya para después, para cuando las elecciones estuviesen ganadas por el PSOE. Una campaña postelectoral, que si ha fallado en algo es en la previsión de que el partido socialista iba a ganar la mayoría absoluta del parlamento andaluz: se le suponía ya necesitado del partido comunista para gobernar esa autonomía con lo que inmediatamente hubiese sido llamado «Frente Popular». Todo esto es, también, un preludio para las elecciones generales que se celebrarán cuando se celebren: quizá lo más tarde que pueda conseguir el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, que también practicó abundantemente la cura en salud advirtiendo repetidas veces que el partido del Gobierno, que el Gobierno central, no se vería afectado por los resultados andaluces.

Tiene y no tiene razón. Esta dificultad de saber dónde está la lógica y el comportamiento correcto procede de la misma ambigüedad y de la deliberada falta de definición de cómo es el «Estado de Autonomías», de cuáles son las fronteras de poderes y las repercusiones de las distintas situaciones que se están produciendo ya en España. La ambigüedad necesaria en un partido de tendencias muy plurales, en un «movimiento» que no parece profesar más que la doctrina de «centro» sin que en sus numerosas definiciones haya acertado con una que defina realmente qué es el centro, donde se encuentra, y a qué circunferencia está geoméricamente referido. Dentro de un imaginario estado de autonomías más o menos configurado según modelos vigentes en Europa y en América no se podría negar la validez a una situación en que cada uno de los departamentos, regiones, estados federales, cantones o como quiera que se puedan llamar estuvieran gobernados por partidos distintos del que ejerce el poder central: la limitación de funciones está definida, se sabe a qué corresponde cada cual de los sistemas administrativos y políticos. Pero se trata de países con vieja experiencia, y, sobre todo, países sin el viejo sobresalto español de las «independencias» o del «separatismo», que aquí figuran principalmente en dos extremos: el de las minorías —muy mínimas, pero muy exaltadas— separatistas y el de las minorías —también muy mínimas, pero con fuerza y poder— que ven la ruptura a cada caso. En el supuesto de esa situación establecida, del Estado de Autonomías definido, Calvo Sotelo tendría suficiente razón como para considerar intacto el poder central: la vigencia del partido que está gobernando. Pero no lo está. Y es difícil imagi-

nar que UCD salga de este descalabro sin enormes destrozos. La pugna electoral andaluza la han llevado los cuatro grandes partidos parlamentarios nacionales, y apenas ha figurado en el resultado final uno solo de carácter regional. Es un caso distinto al del País Vasco y al de Cataluña, algo más parecido al de Galicia. Entre estos cuatro partidos nacionales, el que gobierna la nación ha quedado en tercer lugar, a una enorme distancia del socialista y una pequeña de su derecha, Alianza Popular (la suma de la «mayoría natural» de la que habla Fraga, tampoco habría conseguido nada. Dada la situación de España la falta de maduración de los sistemas autonómicos y su confusión, la lógica de las cosas quería que el partido en el poder disolviese las Cortes y convocase elecciones generales. Parece bastante evidente que el partido ha ido perdiendo su encanto original, el de ofrecer una medida de equilibrio para el tiempo de la transición: para ello, incluso, ha prolongado más de lo debido el tiempo de la transición. Cabría suponer que el verdadero final de la transición se ha producido en las elecciones de Andalucía. Se ha planteado allí un enfrentamiento característico entre izquierda y derecha: es decir, se ha bipolarizado la opción política. El suave encanto de UCD se ha desmoronado. El desangelado rostro de Calvo-Sotelo no ha sustituido al del artífice del partido y de la transición, Adolfo Suárez: que, muy cuidadosamente, se ha abstenido de participar en la campaña; no ha querido comprometerse con lo que se veía venir. Y se ha mantenido en la reserva, con la esperanza de emerger en caso de necesidad.

¿Ha llegado ya ese caso? Puede Calvo-Sotelo y la dirección del partido hacer todo lo posible por retrasar la convocatoria de elecciones: la Constitución les ampara. Pero es difícil que pueda contener el desánimo, las iras, las reconveniones de su propio partido. Porque una eventualidad es la de que el Gobierno dimita y se convoquen —por el Rey, pero a propuesta del actual Presidente— las elecciones generales; y otra es la de que Leopoldo Calvo-Sotelo pueda seguir al frente de un partido al que ha llevado a la derrota y a la desunión. No es que antes de él UCD fuese un paraíso de amistad y comprensión: el famoso Congreso de Mallorca y hasta las raíces del golpe del 23 de febrero —es decir, la provocación a la dimisión de Suárez— son de antes. Pero el calvosotelismo ha presidido la huida de diputados —hacia la derecha, hacia la izquierda—, ha suspendido la gobernación del país hasta el punto de casi refugiarse en un despacho de asuntos de trámite y, en la actualidad, puede estar en minoría en las Cortes: se tiene que apoyar unas veces en unos pactos, otras en otros, para sacar adelante algo. No se sabe si va a encontrar, ahora, dónde apoyarse. Los socialistas están henchidos de triunfalismo, y no es para menos: pueden creer que si tienen una oportunidad de gobernar el país, esa oportunidad es ésta. No se sabe cuál es su pensamiento profundo, si querría efectivamente dejar que UCD llegase al fondo del abismo en los próximos meses, o si teme una posible desestabilización contra los «rojos» y los «marxistas» desde fuera del Parlamento y para el caso de que ganase unas

elecciones legislativas. De no ser así, tiene toda la capacidad para hostilizar el gobierno en la Cámara y plantearle temas que reflejen su estado de minoría y sus fracturas internas. Tiene ya la obligación de hacerlo: es decir, tiene la obligación de adoptar una imagen. Todo lo moderada, todo lo posibilista, todo lo coyuntural que quieran sus directores que les parezca conveniente para el contexto mundial y para el español: pero de una claridad absoluta. A la derecha de UCD, Alianza Popular tiene también la sensación justa de triunfo: un triunfo considerable, después del de las elecciones gallegas. Fraga ve una marea ascendente en torno suyo, y una marea que va a crecer ahora. Para los que consideran que en Andalucía han ganado «los rojos» y los «marxistas», pero no pretenden salirse de la legalidad y de la Constitución, Fraga empieza a ser el hombre de recambio, y la derecha aliancista la única solución. Fraga sabe sin duda que unas elecciones generales no le darían de ninguna manera una mayoría gobernante: es pronto para eso. Pero si un gran número de escaños. La disolución de las Cortes podría serle benéfica en lo inmediato: a costa de UCD.

Anticipadas o en su fecha constitucional prevista, la proximidad de las elecciones y lo sucedido en Andalucía hacen pensar que en ningún caso será Calvo-Sotelo el que dirija la campaña electoral; y si UCD es prudente —si es algo aún, aparte de un amontonamiento de tendencias y de iras, de ambiciones y de furias— no dejará que sea este mismo gobierno quien dirija la campaña. Ni la figura imperturbable y cerrada de Calvo-Sotelo quien dé el rostro a UCD. Debería estar ya preparando —quizá lo haya hecho— un gobierno de recambio. Pero ¿en qué sentido? El regreso de Adolfo Suárez está siempre en lo posible, pero no en lo probable. Sería una opción hacia la izquierda (dentro de lo relativo); es decir, un regreso a la situación no ya anterior al golpe, sino al pregolpe. El partido timorato no querría plantear ese desafío, pese a que podría suponer una manera de recuperar muchos de los votos de una burguesía desconsolada que ahora, en Andalucía, se ha inclinado por el PSOE. La inclinación, por el contrario, hacia una derecha constructiva —la eterna opción a la que se suele dar el nombre de Landelino Lavilla, tan libre de sospechas de golpe como el que más— chocaría, a su vez, con la derecha de Fraga. Parece desde este observatorio que Fraga es un disparate, que su partido es un disparate y que, más que su programa, sus comentarios continuos —de él y de sus más fieles adheridos— a las incidencias de la vida española resultan bastante temibles. Pero un disparate no es nada ajeno a la historia política de España y la psicología de una determinada derecha; y, además, nadie tiene por qué aceptar esta opinión. Quiere decirse que la tantas veces observada —y ahora más que nunca— tendencia a la bipolarización pasa cada vez menos por UCD; y que en una especie de alianza —que aún podría hacerse— gubernamental entre UCD y Alianza Popular en la que estuviera incluido Fraga, fuera cual fuera la dosificación de ministros y quien correspondiese la presidencia, sería Fraga el que mandase. Por su carácter personal y por la fuerza de su situación parlamentaria y sobre todo electoral.

Evidentemente no hay que abstraerse de una realidad de estas elecciones: que se han celebrado en Andalucía y que han movido a sus electores por intereses andaluces. Lo cual parece contrastar con el hecho, no previsto de la caída vertical del partido andalucista y de la insignificancia de otros grupos regionalistas. Andalucía no ha llegado a fraguar unas «señas de identidad» que tienen las otras «nacio-

nalidades históricas», a pesar de los deseos y de los cánticos de algunos intelectuales. Andalucía es —o parece sentirse, por el sentido de las campañas y de los votos— una región española con profundos problemas sociales y de desarrollo; parece sentir la necesidad de que sea un partido nacional, dentro de una situación nacional —sin renunciar a sus posibles ventajas autonómicas— el que resuelva las situaciones. Con Andalucía se ha desgastado más que ninguna otra opción política, más que con cualquier tema nacional o regional —incluso más que en el País Vasco, cuya situación es enteramente distinta— el gobierno de UCD: no ha sabido sacarla de una situación que en muchos casos se puede definir simple y llanamente con la palabra «hambre». Era lógico que cayese aquí. Y todavía sorprende que el pueblo andaluz haya elegido una solución tan relativamente moderada como la que ofrece el PSOE, y que haya subrayado con su escasez de votos las pocas posibilidades de hacer algo, o de atraer algo, del partido comunista y de los minipartidos de la extrema izquierda. Quizá la campaña de los empresarios contra los socialistas haya ayudado a éstos en muchos puntos: les ha radicalizado aun en contra de la voluntad socialista al darles una imagen mucho más avanzada de la que en realidad tienen. Y, al mismo tiempo, se han definido como adversarios de una solución popular. Si hubiera lógica la directiva de los patronos que ha comprometido de esa manera a los empresarios —cuando su conveniencia como grupo económico hubiera sido la de buscar un entendimiento con los socialistas que iban a ganar: algo de lo que están intentando los patronos en Francia— tendría que dimitir por las mismas razones que Calvo-Sotelo. Si el PSOE ha sido beneficiado por cómo ha sido pintado por los patronos, Alianza Popular ha sido beneficiada, en detrimento de UCD.

No es por lo tanto demasiado conveniente traducir los resultados de las elecciones de Andalucía a un contexto nacional, en el que probablemente el PSOE no tendría el predominio de escaños que tiene ahora en el Parlamento andaluz; pero sí se ve ya muy claramente una tendencia de voto nacional.

Aquí podría darse por terminada la transición. Sea cual sea el destino de las actuales Cortes y la proximidad de las elecciones generales, sea quien sea el ucedista que sustituya a Calvo-Sotelo, el partido de Gobierno tiene que comprender que debe gobernar con velocidad, entereza y fuerza, porque cada nueva ambigüedad o suspensión le arrebatara una urna entera; y la oposición socialista tiene que comprender, también que se le han terminado los tiempos de pactos, consensos o acuerdos, y que tiene que esclarecer su imagen. Ya no le basta con la oscuridad de los ayuntamientos, en los que ha ido generalmente unido a los comunistas. Ahora tiene una región entera; y una región sobre la que se puede volcar toda la hostilidad del poder central. La transición parece haber terminado.

Es indudable que en esta situación se evoque de nuevo el peligro desestabilizador: el riesgo de que el progreso socialista, a pesar del hundimiento comunista, se capitalice en los círculos golpistas y se haga crecer una campaña antimarxista de viejo corte, hasta el punto de la violencia. No parece que sea posible en estos momentos: pero es un riesgo que hay que tener en cuenta. Simplemente, la otra solución puede ser más grave: la de seguir haciendo política a la sombra de la amenaza con lo cual, en muchos casos, ha ido pareciendo que el golpe que perdieron quienes lo dieron en realidad lo habían ganado. ■ E.H.T.